

La iniciativa Yasuní-ITT presentada por el Ecuador

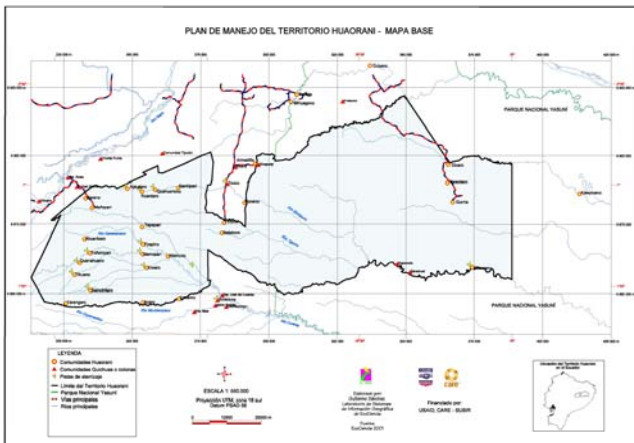
por **Paúl Cisneros**
Máster del Programa de
Estudios Socioambientales
Doctorado en Ciencias Políticas
FLACSO—Ecuador
pcisneros@flacso.org.ec

Sin duda la iniciativa de represamiento de crudo pesado en el campo ITT ha levantado grandes expectativas en algunos círculos políticos y sociales del Ecuador y del mundo. Algunos de estos, por ejemplo los círculos en los cuales se toman las decisiones de gobernanza ambiental en el Ecuador, parecen apuntarle al fracaso del proyecto aduciendo la eterna necesidad de recursos económicos que tiene el Estado. Esta postura es cuestionable cuando se toman en cuenta las cifras de ingreso por petróleo al presupuesto del Estado, el despilfarro de dinero que representan los subsidios al consumo del que gozamos los ecuatorianos y el bajo impacto que este

modelo ha tenido en la reducción de la inequidad desde que se explota petróleo en el Ecuador. El gremio conservacionista, por su parte, una vez más ha mostrado su desunión cuando salió a flote la propuesta. El “ala radical” del movimiento recibió críticas de sus pares más “moderados” por respaldar un esquema de manejo de servicios ambientales criticado férreamente por ellos en el pasado. El ala moderada en cambio no ha podido o no ha querido posicionar abiertamente el tema en la opinión pública. No se ha pronunciado tal vez por cautela abierta y masivamente a favor o en contra del gobierno, mostrando nuevamente su falta de visión para aprovechar momentos políticos importantes que le sirvan para construir sobre la poca representatividad que tiene entre la población del país.

El reducido mundo académico ecuatoriano ha debatido junto a activistas y algunos representantes del

continúa en la página 18



Mapa Parque Nacional Yasuní (cortesía Iván Narváez)

Estado la propuesta de represamiento y, ha sabido señalar algunas de las falencias, imprecisiones e incongruencias que se proponen. Esto con un tono implícito de escepticismo y anticipación del fracaso de la misma, al recordar constantemente - y no con poca razón - lo destructivos que han sido los 38 años de política extractivista en la amazonía, tanto ambiental como culturalmente.

La opinión pública por su lado, una vez más desinformada en su mayoría de la iniciativa, cumple un papel bastante pasivo en la actualidad, sin embargo, seguramente será el receptáculo de versiones cada una más radical que la otra sobre los beneficios impactos del proyecto una vez que éste sea apropiado como elemento clave de campaña electoral post-asamblea constituyente.

De esta forma, mantener el crudo en tierra, brindándole al mundo una oportunidad para empezar a cambiar la forma de ver el uso de los recursos naturales y poner en movimiento una de las propuestas más innovadoras que se han hecho desde el tercer mundo para la reducción de gases de efecto invernadero, parece ser una tarea compleja con muchos retos casa adentro. Es en este espacio donde los impulsores de la propuesta todavía no han podido construir un apoyo que la sostenga frente a las múltiples incertidumbres de un mercado mundial de servicios ambientales que todavía es espurio y un mercado energético controlado por la demanda de los países industrializados y no por la oferta. La petición presentada por el gobierno ecuatoriano a la comunidad internacional para ser compensado por el costo de oportunidad de dejar el crudo en el

subsuelo (El presidente Correa habla de 4500 millones de dólares en un período todavía incierto) (Larrea, 2007) parece haber recibido una acogida limitada que hasta el momento no pudo ser canalizada con la creación de una adecuada estructura administrativa burocrática que permita integrar la propuesta en el esquema actual de gobernanza energética del país de una forma que provoque una reforma en este y lo oriente hacia la eficiencia en la extracción y hacia la justicia distributiva de la renta que se produce.

Si bien la imagen ecologista del Ecuador se pudo haber visto beneficiada por tal iniciativa, las señales contradictorias que da el Estado a la comunidad internacional a la que acude por ayuda, cuando concede una licencia ambiental a Petrobras para operar el bloque 31 en el mismo Yasuní (MAE, 2007), busca memorandum de entendimiento con otras empresas (SINOPEC-ENAP-PETROBRAS) y mantiene conversaciones con PDVSA para explotar el ITT (Narváez, 2007), hacen prever que una vez más, el extractivismo pondrá en grave riesgo los recursos del área protegida más grande y biodiversa del Ecuador continental.

Los 920 millones de barriles que ofrece el ITT para una explotación de 20 años, y con ellos la fuente de ingresos que se pueden esperar para el próximo período de gobierno, parecen ganarle de momento la pulseada a la que ha sido denominada una propuesta “ecologista utópica” (Fontaine, 2007) que no ha podido llegar a ser lo suficientemente antisistémica al no poder calar profundamente en las endebles iniciativas internacionales no solo para reducir las emisiones -sino y tal vez más importante y de fondo- para reducir el consumo de energía y acelerar el necesario cambio tecnológico en el primer mundo. Podemos concluir de momento que ni casa adentro ni casa afuera la propuesta ha sido vendida adecuadamente como una idea con 1) potencial de cambio de viejas estructuras ineficaces de extracción y redistribución y 2) de replicabilidad mundial como parte de un nuevo modelo de consumo de energía, y el inicio de una larga travesía hacia la consecución de una sustentabilidad energética global.



Heliconia sp.
Foto Miguel de la Iglesia